Partidos Políticos y Competencia Electoral en Ecuador entre 2009 y 2013

Political Parties and Electoral Competition in Ecuador, 2009-2013

Alfredo Espinosa Rodríguez

Recepción: 07 de septiembre de 2018

Aceptación: 02 de octubre de 2018

Resumen

Este trabajo, estudia cómo los cambios a la normativa electoral realizados entre 2009 y 2013 dieron lugar a una relativa estabilidad (y a la concentración de poder) para que el gobierno de la época y su movimiento político puedan gobernar. En este sentido, se realiza un ejercicio narrativo-descriptivo y analítico-reflexivo para caracterizar el periodo en mención y las diferentes reformas electorales que en él se implementaron. También analiza cómo el intento por modernizar la política, a través de la normativa electoral (Código de la Democracia), sucumbieron frente al hábitus clientelar de los distintos actores políticos: los líderes de los partidos y movimientos, y los ciudadanos electores. Por todo lo expuesto, se concluye que las reformas electorales propiciadas en el periodo 2009-2013 respondieron a la intención de Alianza País de constituirse en partido predominante en el escenario político nacional.

Palabras clave: partidos políticos; competencia electoral; democracia; clientelismo; Ecuador.

Abstract

This document, studies how the electoral normative changes that were realized between 2009 and 2013, set up a peaceful stability and (the concentration of the power) to the government of that time, and its politics movement could govern. In this way, it shows a narrative descriptive and analytical reflexive sample to qualify the mentioned period in different electoral reforms that were implemented. Also, it analyzed how the attempt to modernize the politics through the electoral normative (Democratic Code) succumbed to the client habitus in different politics stages: leaders from the parties, and movements and the electoral citizens. In summary, it concludes that the electoral reforms done in the period from 2009 to 2013 asking the intention of Alianza País to constitute in predominant party in the Ecuadorian political scene.

Key words: political parties; electoral competition; democracy; clientelism; Ecuador.

Estabilidad y concentración de poder a raíz de los cambios a la normativa electoral entre 2009 y 2013

A diferencia de la década comprendida entre 1996 y 2006, que se caracterizó por la presencia fragmentada de la representación política en el Congreso Nacional, el derrocamiento de tres presidentes constitucionales, el ambiente de confrontación entre las funciones Ejecutiva y Legislativa y los constantes cambios a la normativa electoral propiciados por la visión cortoplacista de los partidos tradicionales. El escenario político tuvo un cambio significativo a partir de 2007, con la elección presidencial de Rafael Correa, quien consiguió importantes triunfos electorales como candidato y proponente en la reestructuración de la institucionalidad del Estado.

Correa ganó la Presidencia de la República en la segunda vuelta electoral del año 2006 con el 56,67% de los votos válidos. “Más adelante, se ratifica y amplía el apoyo ciudadano a su proyecto político, al aprobarse la convocatoria a la Asamblea Constituyente con el 81,72%, en la Consulta Popular realizada el 15 de abril del 2007. Un tercer momento de afirmación de Alianza País, movimiento político liderado por Correa, se produce en la elección de asambleístas, al obtener 73 de los 130 escaños” (López y Cubillos, 2009: 14). La cuarta victoria del mandatario se dio con la aprobación mediante referéndum de la nueva Constitución de 2008 con el 63,99% de los votos.

Es decir, Correa no solo se mantuvo en el poder; sino que además fue reelecto como mandatario por dos ocasiones y consiguió el apoyo de los votantes para viabilizar la reingeniería del Estado, a través de las consultas populares. De igual manera, Alianza País, rompió con la fragmentación legislativa de la década anterior, situación que le otorgó una relativa estabilidad política.

Por lo expuesto, este trabajo se propone identificar qué características de la competencia partidista organizada entre 2009 y 2013 (cuando se estructuró la nueva institucionalidad eleccionaria), contribuyeron a la estabilidad política del movimiento oficialista y del gobierno de turno.

El camino hacia la aprobación de la nueva normativa electoral

La Constitución de la República elaborada en Montecristi y aprobada en 2008 dio paso a través de su Régimen de Transición a la sanción de cinco leyes, entre ellas la Ley Orgánica Electoral (Freidenberg, 2011: 33). Para ello, en su última sesión, la Asamblea Constituyente conformó una Comisión Legislativa y de Fiscalización integrada por 76 asambleístas de diferentes tiendas políticas a fin de orientar el proceso de transición previo a las elecciones del año 2009.

La Comisión debatió la propuesta enviada por el Consejo Nacional Electoral – CNE, institución que reemplazó al antiguo Tribunal Supremo Electoral – TSE. Este organismo acogió el borrador de ley electoral de 277 artículos que elaboró el grupo “Ágora Democrática”, integrado por el Programa Conjunto de IDEA Internacional y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD). La presencia de “Ágora Democrática” para realizar el borrador de la ley se viabilizó a partir de un memorándum de cooperación con el ahora extinto Ministerio de Coordinación Política.

Sobre la base de este texto, distintos actores sociales y políticos presentaron sus propuestas a la Comisión Legislativa y de Fiscalización (por intermedio de sus subcomisiones) para elaborar un nuevo borrador de documento y someterlo a los posteriores debates para su aprobación. Esto produjo un incremento en el número de articulados del texto original.

Flavia Freidenberg (2011: 34) destaca algunos puntos de convergencia entre la Constitución de 2008 y la propuesta de Ley Orgánica Electoral como: “el de proporcionalidad, igualdad de voto, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres y también servía para regir lo relacionado con los conflictos electorales, como el juzgamiento de cuentas, impugnaciones de resultados, entre otros”.

Sin embargo, pese a que la mayoría de integrantes de la Comisión Legislativa y de Fiscalización aprobaron en febrero del año 2009 la nueva Ley Orgánica Electoral¹, el presidente Correa planteó 33 objeciones a este

1. Antes de las objeciones presidenciales, la Ley Orgánica Electoral se aprobó con 45 votos favor, 11 negativos, 2 blancos y 11 abstenciones (Freidenberg, 2011: 35).

documento. Algunas de las propuestas del Ejecutivo sostenían que:

- a. Los asambleístas o diputados fueran elegidos en la segunda vuelta electoral, mientras que el bloque de Alianza País defendía que fuera en la primera vuelta; b) que las elecciones se realizaran luego de 120 días de la convocatoria, en lugar de 90; y, finalmente, c) que los partidos pudieran inscribir sus candidaturas 91 días antes del cierre de campaña. Otra de las recomendaciones del Ejecutivo tenía que ver con la necesidad de ampliar el período de convocatoria de elecciones, de 90 a 120 días, argumentando que se está ante una “realidad distinta, que ha sido radicalmente modificada por la Constitución vigente” (Freidenberg, 2011: 35).

El paso de las observaciones del Ejecutivo al texto final de la Ley Orgánica Electoral nos deja en claro la fuerza que tenía el poder de veto del presidente, así como la capacidad del gobernante y sus ministros para hacer que sus asambleístas se allanen a su voluntad.

El triunfo de Alianza País en 2009 y el camino hacia una relativa estabilidad para gobernar

Los resultados de las elecciones presidenciales del 26 de abril de 2009 trajeron entre otras cosas un nuevo mandato para Rafael Correa y su binomio Lenín Moreno; pero también la consecución de algunos hechos importantes. Por ejemplo, Alianza País ratificó en las urnas el respaldo a su líder, una situación que en la década anterior a 2006 no se vio porque la principal característica del escenario político era la inestabilidad para gobernar.

Este respaldo de los electores hacia el binomio Correa-Moreno se cristalizó entre otras razones por el discurso del gobernante/candidato, que canalizó las emociones de los votantes en favor de su lucha contra el pasado, al que calificó de “larga y triste noche neoliberal” y responsabilizó de la crisis financiera de los años 1998-1999 que perjudicó a miles de ecuatorianos y sus familias.

Para ello, Correa levantó su discurso aludiendo al pueblo² por oposición a quienes gobernaron la década anterior a 2006: la élite política y económica del país. De esta manera, el populismo de la Revolución Ciudadana, al igual que en los 80 con el PRE, comenzó “en el punto en que los elementos popular-democráticos se presentan como opción antagónica frente a la ideología del bloque dominante” (Laclau, 1980: 2020). Que bien puede estar integrado por la partidocracia y los banqueros, en el caso de Rafael Correa; o la oligarquía, en el de Abdalá Bucaram.

Este discurso maniqueo cimentó el andamiaje populista de dominación carismática con el que se identificaron los ciudadanos desestructurados de los movimientos y organizaciones sociales que buscaron una alternativa frente a una desprestigiada clase política.

En este sentido, el apoyo a Rafael Correa para su reelección presidencial también se vio reflejado en el número importante de legisladores que obtuvo el movimiento de gobierno en las elecciones de 2009, 59 de 124. Lo cual marcó una relativa estabilidad si comparamos estos resultados con los obtenidos en las elecciones de asambleístas constituciones donde Alianza País alcanzó 73 de las 130 curules.

Estos resultados sentaron las bases para que Alianza País intente constituirse -en términos de Giovanni Sartori (1980)- como un partido predominante. Es decir, una organización política que en el parlamento alcance el 50% o más de escaños. No obstante, aunque cuantitativamente esto no se dio³, algunas características del sistema de partido predominante se evidenciaron como resultado de la competencia electoral de 2009; por ejemplo, el pluralismo de organizaciones políticas en la competencia: partidos y movimientos aliados y detractores. En el caso de estos últimos, “los partidos menores [fueron] antagonistas verdaderamente independientes del partido predominante” (Sartori, 1980: 249).

2. Para Laclau (1980: 193) “pueblo no es un mero concepto retórico, sino una determinación objetiva, uno de los dos polos en la contradicción dominante al nivel de una formación social concreta”. Es decir, el concepto de pueblo es inteligible si y solo se lo asocia por oposición al de bloque de poder.

3. Para Giovanni Sartori (1980: 249) “una mayoría que sea casi absoluta pero no llegue al punto del 50 por 100 no es una condición suficiente del “predominio” por lo que respecta a las calificaciones del sistema de partidos”.

Los principales hitos del Código de la Democracia

Los defensores de la nueva normativa electoral como el ex asambleísta Virgilio Hernández (2009: 2), argumentaron que esta ley (aprobada bajo los parámetros dispuestos por el Ejecutivo y el movimiento de gobierno) era necesaria para cumplir con los siguientes objetivos:

- a. Generar corresponsabilidad política entre Ejecutivo y Legislativo;
- b. Eliminar la partidización de la justicia, de tribunales y organismos de control;
- c. Incentivar la participación ciudadana;
- d. Democratizar el sistema electoral;
- e. Construir un sistema de partidos dado que las organizaciones políticas son fundamentales para la democracia.

Aunque no es materia de este trabajo debatir los puntos citados por Hernández, se puede manifestar que el devenir de los acontecimientos demostró cómo la promesa de reinstitucionalización del Estado enfocada a la despartidización de la justicia⁴, la denominada participación ciudadana⁵ y la edificación de

4. Si bien es cierto la intromisión de la política y de los partidos en la justicia no es un componente exclusivo de la Revolución Ciudadana y del movimiento Alianza País, si es necesario recordar las palabras del Presidente Correa, quien el 25 de enero del año 2011 manifestó: “por supuesto que meteremos las manos en las cortes con las que nadie puede estar satisfecho ¿Y qué tiene eso de extraño?” (Ecuavisa 2011). A esto se suman acciones preliminares como la reducción del número de magistrados de 31 a 21; la pérdida de la facultad del Legislativo para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; la creación de un Consejo de la Judicatura de Transición compuesto por personas afines a su gobierno (Verdesoto, 2017: 58-60).

5. En el ámbito de la participación ciudadana dos son los puntos que entran en la polémica: Primero, la forma en la que el gobierno del Presidente Correa concibe este ámbito y; segundo, la estructura de la institución encargada de velar por la transparencia y la probidad de los funcionarios de las instituciones de control. En el primer caso, se puede decir que la participación, desde la óptica del gobierno de Rafael Correa, fue dependiente del Estado. Es decir, una participación que se legitima desde el poder estatal y más no desde las organizaciones sociales. En el segundo caso, el Informe alternativo de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, presentado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en las sesiones de los días 27 y 28 de julio de 2016 en Ginebra, Suiza destaca: “... el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) [...] ha provocado una constante y sistemática distorsión y enajenación de la voluntad popular, en la medida en que las autoridades que procesan concursos y establecen requisitos no surgen de la directa representación de la ciudadanía, sino son la expresión de la soberanía popular de delegados de origen mayoritario en el Ejecutivo” (Verdesoto, 2017: 127).

un sistema de partidos fuertes; no se cumplieron en tiempos de Revolución Ciudadana.

Pese a ello, no se pueden omitir los principales hitos que contempla el Código de la Democracia. Flavia Freidenberg (2011: 39) destaca los siguientes:

1. Registro y supervivencia de partidos y movimientos políticos

Pasadas las elecciones del 26 de abril del año 2009, todos los partidos y movimientos políticos dejaron de existir. Para reinscribirse, las organizaciones políticas debían cumplir con los requisitos establecidos tanto en la Constitución de la República como en el Código de la Democracia en sus artículos del 305 al 384.

Este ejercicio permitió en cierta medida que los partidos y movimientos nuevos y tradicionales se reencuentren con los ciudadanos para ratificar el apoyo de estos a sus organizaciones políticas. Sin embargo, una vez más las reglas del juego electoral inclinaron la balanza en favor de los movimientos, ya que los requisitos que debían presentar al Consejo Nacional Electoral no eran los mismos que el de los partidos.

Al respecto, Dalton Bacigalupo, ex director de la Izquierda Democrática – ID, expresó lo siguiente: “Luego de solicitar la reinscripción ahora nos falta lo más difícil: como partido debemos presentar 160 000 afiliaciones, mientras que los movimientos solo necesitan 160 000 firmas” (El Comercio, 2009). ¿Cuál es la diferencia? Que las adhesiones requieren un trámite especial de verificación. Esta fue una de las causas por las cuales organizaciones como la ID desaparecieron del registro electoral⁶.

Flavia Freidenberg (2011: 40) destaca otros requisitos que debieron presentar los partidos y movimientos para su reinscripción, como “los estatutos, programas de gobierno, declaración de principios, una estructura nacional de al menos 12 provincias (dos de las cuales deben ser las de mayor

6. A este factor habría que añadir la falta de democracia interna y las disputas entre dirigentes políticos, así como también el desgaste político de sus líderes.

población) y un registro de afiliados no menor al 1,5 por ciento del padrón nacional (157.500 firmas), con las copias certificadas de sus fichas”. Además, “Sólo el 60 por ciento de los afiliados deben ser de las provincias de mayor población” (Freidenberg, 2011: 40).

Este proceso estuvo acompañado por la obligatoriedad de realizar elecciones primarias al interior de los partidos y movimientos a fin de instaurar, en unos casos; y fortalecer en otros, los procesos de democracia interna en las organizaciones políticas⁷. Aspecto que se complementaba con la participación igualitaria y paritaria de hombres y mujeres. Características que antes de 2009 no formaban parte del quehacer político de los partidos y movimientos, ya que el líder de la organización política por lo regular decidía quien participaba o no como candidato.

2. El escenario de la competencia electoral

Antes del año 2009 los partidos y movimientos políticos competían en dos escenarios: nacional y provincial, para obtener el mayor número de legisladores en el Congreso. Sin embargo, este espacio se amplió con la aprobación del Código de la Democracia, ya que la competencia electoral incluía la participación de los migrantes no solo en el ejercicio del sufragio, sino como potenciales candidatos auspiciados por los partidos y movimientos políticos.

Aunque en la práctica -como sostiene Freidenberg (2011: 41)- quienes ganaron las elecciones legislativas eran asambleístas (por igual) sin importar la circunscripción en la cual fueron electos; la sola presencia de este tipo de legisladores permitió visibilizar un intento por democratizar los escenarios de la competencia. Más aún, si consideramos que el Presidente Correa, en varias de sus intervenciones, destacó el papel de los migrantes en la economía del

7. Aunque existían mecanismos de democracia directa en la Constitución de 1998, estos no se aplicaban de manera regular. Por ejemplo, la Consulta Popular no se podía realizar para reformas constitucionales. De igual manera, la revocatoria del mandato solo tenía alcance para alcaldes, prefectos y diputados. Más no para el Presidente y Vicepresidente de la República.

país luego de la crisis financiera de los años 98-99 que los obligó a salir del Ecuador⁸.

3. Organismos de control electoral

Con la entrada en vigencia del Código de la Democracia en 2009, el máximo organismo de control electoral: el Tribunal Supremo Electoral – TSE, cambió de nombre y se dividió en dos instituciones: el Consejo Nacional Electoral – CNE y el Tribunal Contencioso Electoral – TCE.

El primero, tiene como principal función la organización de los distintos procesos electorales. Es decir, elecciones generales, seccionales, consultas populares y referéndums; así como también viabilizar las revocatorias de mandato a los funcionarios de elección popular con base en lo dispuesto por la Constitución de 2008. De igual manera, el Consejo Nacional Electoral se encarga de mantener el registro de organizaciones políticas y de votantes.

Esta institución controla que las organizaciones cumplan con sus procesos de democracia interna, a través de las elecciones primarias para la participación de sus candidatos a las distintas dignidades nacionales, provinciales y cantonales. Además, vigila el cumplimiento del gasto electoral en campaña para que los partidos y movimientos hagan uso de las franjas de propaganda dispuestas por el Estado.

El segundo, es un organismo de justicia electoral que puede “conocer y resolver los recursos contenciosos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y los organismos desconcentrados” (Freidenberg, 2011: 42). El Tribunal Contencioso Electoral también puede conocer los litigios internos de los partidos y movimientos políticos, y establecer resoluciones jurídicas en este ámbito.

8. Las remesas de los migrantes son una fuente importante de ingresos para la economía del país. Según destaca Galo Viteri (2009) en su artículo “Ecuador: migración y remesas año 2009”, del Observatorio de la Economía Latinoamericana. En el año 2008 este concepto representó USD 2 821,6 millones para el Ecuador. Mientras que en el año 2009 -aunque se registra una reducción- el monto no deja de ser importante- pues llegó a los USD 2 495,1 millones.

Otra característica de los organismos de control electoral tiene que ver con los mecanismos para la designación de sus autoridades. En este sentido, se pueden identificar tres momentos: el primero, que contempló la designación de vocales por medio de ternas enviadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y representantes de los ciudadanos ajenos al Congreso; el segundo, que estableció la conformación del TSE con base en las ternas enviadas por los partidos y movimientos más votados y con mayor presencia legislativa; y el tercero, a través de concursos de méritos y oposición realizados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – CPCCS, donde los mejor puntuados son nombrados consejeros electorales⁹.

El Cuadro 1 detalla los constantes cambios en la metodología para la designación de funcionarios de los organismos de control electoral.

Cuadro 1.

Metodología para la designación de autoridades TSE – CNE

Constitución de 1979 Codificada en 1984. Art. 109.	• El TSE se constituirá con siete vocales, uno de los cuales lo presidirá y serán elegidos por el Congreso Nacional en la siguiente forma: tres de fuera de su seno, en representación de la ciudadanía; dos, de ternas enviadas por el Presidente de la República; y dos, de ternas enviadas por la Corte Suprema de Justicia.	Método vigente hasta 1996.
	• En ningún caso los integrantes de las ternas serán servidores del sector público, ni magistrados, jueces o empleados de la Función Jurisdiccional.	
	• Duración dos años con posibilidad de reelección.	

9. La designación de funcionarios a través de los concursos de méritos y oposición realizados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – CPCCS, también ha sido objeto de cuestionamientos, ya que los postulantes a ser autoridades, en muchos casos ex funcionarios de gobierno o simpatizantes de éste, obtienen los mejores puntajes en los concursos.

Constitución de 1979 Codificada en 1997. Art. 137.	<ul style="list-style-type: none"> • El TSE se constituirá con siete vocales principales y sus respectivos suplentes, en representación de cada una de las siete listas que hayan obtenido las más altas votaciones en las últimas elecciones pluripersonales a nivel nacional. 	Método vigente hasta 1997.
	<ul style="list-style-type: none"> • Para el efecto, los representantes legales de los partidos políticos o movimientos independientes presentarán al Congreso Nacional para su designación, las ternas de las que se elegirán los vocales principales y suplentes. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Los vocales durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos. 	
Constitución de 1998. Art. 209.	<ul style="list-style-type: none"> • Se integrará con siete vocales principales, quienes tendrán sus respectivos suplentes, en representación de los partidos políticos, movimientos o alianzas políticas que hayan obtenido las más altas votaciones en las últimas elecciones pluripersonales, en el ámbito nacional, los que presentarán al Congreso Nacional las ternas de las que se elegirán los vocales principales y suplentes. 	Método vigente en el 2009, cuando se aprobó el Código de la Democracia.
	<ul style="list-style-type: none"> • Los vocales serán designados por la mayoría de los integrantes del Congreso, permanecerán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos. 	
Constitución de 2008. Art. 219.	<ul style="list-style-type: none"> • El Consejo Nacional Electoral se integrará por cinco consejeras o consejeros principales, que ejercerán sus funciones por seis años, y se renovará parcialmente cada tres años, dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente. 	Vigente hasta la actualidad
	<ul style="list-style-type: none"> • Existirán cinco consejeras o consejeros suplentes que se renovarán de igual forma que los principales. 	
Constitución de 2008. Art. 220	<ul style="list-style-type: none"> • El Tribunal Contencioso Electoral se conformará por cinco miembros principales, que ejercerán sus funciones por seis años. 	Vigente hasta la actualidad
	<ul style="list-style-type: none"> • El Tribunal Contencioso Electoral se renovará parcialmente cada tres años, dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente. Existirán cinco miembros suplentes que se renovarán de igual forma que los principales. 	
Código de la Democracia 2009. Art. 20.	<ul style="list-style-type: none"> • Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social previa selección, mediante concurso de oposición y méritos realizado por las respectivas Comisiones Ciudadanas de Selección. 	Vigente hasta la actualidad.

Fuente: Constituciones de la República del Ecuador. (1979, 1998, 2008).

Elaboración propia.

La metodología variante en cuanto a la designación de autoridades para conformar tanto el extinto Tribunal Supremo Electoral – TSE, así como el Consejo Nacional Electoral responde a la necesidad de los partidos y movimientos políticos por controlar la función electoral como vía necesaria para evitar tropiezos en su camino hacia la obtención del poder.

Factores que incidieron en la estabilidad del régimen correísta

Con una oposición balcanizada por la falta de acuerdos y los intereses particulares de los partidos y movimientos. Alianza País ratificó en el año 2013 su liderazgo en el escenario político nacional al ganar la Presidencia de la República con el 57,79% de los votos válidos, a más de alcanzar 100 de las 137 curules legislativas. De esta manera, Rafael Correa se afianzó como el presidente con mayor permanencia ininterrumpida en el poder, mientras que su movimiento se consolidó como una organización de carácter predominante en la competencia electoral.

Si bien es cierto, las reformas electorales previas a las elecciones generales de 2013 contribuyeron a la estabilidad del régimen correísta y a la permanencia del gobernante en el poder; también incidieron en otros factores como:

1. La inversión económica en los sectores sociales

El gobierno del presidente Correa incrementó dentro del Presupuesto General del Estado – PGE, los rubros concernientes a las áreas de educación, salud y bienestar social, cerca de USD 3 000 millones se destinaron en 2012 para estos sectores; mientras que en 2011 la cifra fue mayor: USD 3 144 millones, la más alta desde que Correa asumió la presidencia en 2007.

Cuadro 2.*Gasto social de inversión*

Sectores sociales	2006		2007		2010		2011		2012	
	Miliones	PIB	Miliones	PIB	Miliones	PIB	Miliones	PIB	Miliones	PIB
Salud	167.52	0.336	189.17	0.371	227.06	0.402	301.15	0.5	410.76	0.64
Educación	31.98	0.064	137.7	0.27	163.62	0.29	532.31	0.87	346.4	54
Bienestar Social	323.3	0.65	575.64	1.13	271.96	0.48	299.63	0.49	230.74	0.36
TOTAL	2 528.80	5.06	2 909.51	5.70	2 672.61	4.73	3 144.09	5.16	2 999.90	4.7

Fuente: Legarda (2015: 48).

No se puede dejar de mencionar que esto fue posible por la bonanza petrolera, la segunda en la historia del Ecuador; ya que el crudo del país alcanzó cifras importantes para la economía. Mientras que en 2001 el precio promedio anual del barril de petróleo se ubicó en USD 20, en 2011 –diez años después– este alcanzó los USD 97; situación que permitió obtener ingresos superiores a los USD 9 000 millones, con los cuales se pudieron financiar las obras en vialidad, en los sectores estratégicos como las hidroeléctricas y en el gasto de inversión social¹⁰ (Lucio Paredes, 2012: 138-139).

En este último punto, el aumento de ingresos permitió la creación de nueva infraestructura hospitalaria y educativa en el país, así como la continuidad de la política asistencialista del gobierno, por ejemplo, a través del incremento en el número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano –BDH, de 1,6 millones en 2009 a 1,9 millones en 2013; situación que bien se puede traducir en una mayor dependencia de los ciudadanos de escasos recursos hacia las políticas sociales de un Estado benefactor.

Esto nos llevaría a pensar que el fuerte gasto social de inversión no tuvo como único propósito mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino afianzar el carácter clientelar del régimen correísta frente a las masas,

10. Junto a los ingresos petroleros se encuentran también los obtenidos en materia de impuestos y los préstamos entregados por los bancos chinos al Ecuador.

para obtener réditos electorales y estabilidad política. En este último caso, la estrategia se pudo direccionar bien sea a la creación de nichos electorales en sectores donde el régimen no tenía mayor influencia o aceptación¹¹; o bien a la consolidación de su clientela electoral.

2. *Una oposición dispersa*

Si bien es cierto la oposición obtuvo victorias parciales producto de la unidad en acción al interior de la Asamblea Nacional, por ejemplo, cuando se dilató por tres años la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación – LOC; estos espacios de convergencia y acuerdo fueron escasos. El común denominador del quehacer político de las organizaciones de distintos matices ideológicos, contrarias al régimen correísta, fue su dispersión.

El escenario donde se pudieron visibilizar los intereses particulares de los partidos y movimientos de oposición fue el electoral. La falta de alianzas políticas, los personalismos, los intentos de los caudillos de las organizaciones por obtener protagonismo y convertirse -cada uno por su cuenta- en referentes de la oposición reconocidos y legitimados por la opinión pública, limitó la posibilidad de un acuerdo interpartidista o una coalición electoral entre los partidos de derecha liderados por Guillermo Lasso, de CREO; Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica; Mauricio Rodas, de SUMA; y Álvaro Noboa, del PRIAN.

Otro factor importante fueron los objetivos que cada uno de estos partidos se trazó en la competencia electoral y la situación política en la que se encontraban algunos de ellos. Montufar (2013: 6) destaca, en el caso del Partido Sociedad Patriótica – PSP, la intención de articular a la oposición en torno a un proceso de elecciones primarias entre todos los partidos de derecha y centro derecha; sin embargo, esta nunca se concretó, pues no se

11. La inversión de recursos o la implementación de obras en sí mismas no aseguran la reciprocidad de los beneficiarios hacia el régimen que las realiza. Estas deben ir acompañadas de un componente adicional: el trabajo del movimiento o partido político con los ciudadanos y los miembros de las organizaciones sociales, barriales y comunitarias beneficiarias para crear la relación clientelar en función de la reciprocidad y la retribución.

produjeron los acuerdos necesarios para evitar la dispersión. ¿Qué buscaba el Partido Sociedad Patriótica con las elecciones primarias? Legitimar a Lucio Gutiérrez como el único candidato a contender de Rafael Correa.

El Partido Sociedad Patriótica y el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional – PRIAN, del empresario Álvaro Noboa, al igual que los partidos tradicionales de la década de los 80 y 90, también sufrieron un significativo desgaste político que se pudo evidenciar en la votación obtenida en las elecciones generales del año 2013, donde el PSP llegó al 6,7% del total de votos válidos en todo el país, mientras que el PRIAN se estancó en el 3,7%. Una de las razones por la que estos partidos no consiguieron una votación significativa fue el hecho de que los ciudadanos asociaron sus prácticas y discursos con los de los partidos tradicionales, a quienes el presidente Correa calificó en más de una ocasión de “partidocracia”.

En lo que respecta al partido Creando Oportunidades – CREO y al movimiento Sociedad Unida Más Acción – SUMA, ambos salieron beneficiados del desgaste político del PSP y del PRIAN, pues en las elecciones generales de 2013, el partido de Guillermo Lasso obtuvo el 22,7% de los votos válidos; mientras que el movimiento de Rodas el 3,9%, cifra que le permitió superar a políticos con mayor trayectoria en procesos electorales como Álvaro Noboa y Alberto Acosta.

Los objetivos políticos de estas organizaciones fueron diferentes y en eso radicó la imposibilidad de un acuerdo electoral. CREO, por ejemplo, enfocó su estrategia para ganar la elección del 2013, en el marketing y la comunicación política, pues desde su dirigencia “se pensó que la fortaleza electoral del gobierno y de Correa es solo producto de una buena comunicación y que, poniéndole en frente otra buena marca sería suficiente para derrotarlo” (Montufar, 2013: 7). Esto les dio una lectura sesgada y parcial del gobierno de la Revolución Ciudadana.

El movimiento SUMA, por su parte, consideró que las elecciones del 2013 eran la oportunidad propicia para que Mauricio Rodas, crítico al gobierno del presidente Correa y fundador de la Fundación Ethos, se muestre en el escenario político electoral como una alternativa de derecha al correísmo. En este sentido, cualquier alianza con líderes políticos posicionados, así como

con los nuevos, habría significado opacar su imagen y con ello, la posibilidad de sumar un importante capital político a futuro.

3. Las reformas a la normativa electoral

Como se explica en este artículo, la bonanza económica que vivió el Ecuador producto de los altos precios del barril de petróleo, la inyección de ingentes sumas de dinero a los sectores sociales para la creación y consolidación de nichos electorales; y la presencia de una oposición dispersa y fragmentada contribuyeron a la estabilidad del Alianza País en el poder.

Sin embargo, estas no fueron las únicas causales, también incidieron las reformas a la normativa electoral de febrero de 2012, las mismas que colocaron al movimiento de gobierno y al candidato/presidente con posición de ventaja frente a sus contendientes al modificar –a través de un veto presidencial- los artículos 164, 203 y 207 del Código de la Democracia.

¿En qué se basa este argumento? Como señala el Instituto Nacional Demócrata en su Cartilla “Aplicaciones prácticas del Código de la Democracia” (2012: 7), “Existen muchas reglas del sistema electoral, pero las más importantes son la definición de cómo se presentan las listas, la forma de votar, el tamaño de las circunscripciones y, la fórmula de traducción de votos en escaños”. Estas fueron precisamente las reglas que se modificaron a las que se puede añadir la no restricción de la propaganda política gubernamental.

3.1. La nueva asignación de escaños

La reforma al Art. 164 del Código de la Democracia contempló el cambio y diferenciación en la asignación de escaños de asambleístas provinciales y del exterior, concejales y parlamentarios andinos; con relación a los asambleístas nacionales¹². El Art. 19 de la Ley Orgánica Reformatoria a la

12. Los asambleístas nacionales eran elegidos a través del método de Webster. Según la organización IDEA Internacional (2016: 196) “es visto como una variante de las fórmulas utilizadas para convertir votos en escaños en los sistemas de representación proporcional por listas basadas en el método de divisor o cifra mayor. Los votos de los distintos partidos o agrupaciones se dividen entre la serie consecutiva de números impares 1, 3, 5, etc.”

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador (Código de la Democracia), sostiene:

Con excepción de la asignación de escaños para Asambleístas, en la circunscripción nacional, para la adjudicación de listas se procederá de acuerdo con los cocientes mayores mediante la aplicación de la fórmula de divisores continuos y en cada lista, de acuerdo a quien haya obtenido las mayores preferencias [...] (Instituto Nacional Demócrata, 2012: 9).

De esta manera, para los representantes electos de las cuatro dignidades mencionadas al inicio de este acápite, el método que se implementó con miras a las elecciones de 2013 fue el método D'Hondt¹³, que fortalece a las organizaciones políticas con mayor presencia en territorio nacional.

Esto, debido a que el total de votos obtenido por los partidos y movimientos políticos (sin distinción entre los votos individuales o en plancha) -luego del proceso de división sucesiva para el número de escaños que están en juego- otorga mayor representación política a las organizaciones más votadas. Así, por ejemplo, si en las elecciones de 2009 se hubiera aplicado el método D'Hondt, el movimiento de gobierno Alianza País -que logró la mayoría legislativa en 2009- hubiera obtenido (sin alianzas) 10 curules más. Es decir, la presencia legislativa de AP se habría incrementado de 54 a 64 representantes (LaRepública.ec, 2017).

Ahora bien, bajo la consideración de que la reforma al Art. 164 no actuó por sí sola ni produjo de manera aislada una suerte de causalidad en la que los ciudadanos, como efecto exclusivo del cambio en la normativa decidieron apoyar masivamente al movimiento de gobierno, si comparamos la presencia legislativa de Alianza País entre los años 2009 y 2013 podremos

13. Según la organización IDEA Internacional (2006: 176) en su documento "Diseño de Sistemas Electorales: El Nuevo Manual de IDEA Internacional"; el método D'Hondt es "una de las fórmulas utilizadas para convertir votos en escaños en los sistemas de representación proporcional por lista basadas en el método de divisor o cifra mayor. Los votos de los distintos partidos o agrupaciones se dividen entre la serie consecutiva de números naturales 1, 2, 3 etcétera. Los escaños se les asignan a las organizaciones políticas de acuerdo con los resultados o cifras mayores que van generando las sucesivas operaciones. De las fórmulas pertenecientes a este método, se considera que la D'Hondt tiende a ser la más favorable para los partidos más grandes".

ver un incremento significativo en el número de asambleístas de esta tienda política.

Cuadro 3.

Alianza País en el Legislativo 2009-2013

Presencia legislativa 2009			Presencia legislativa 2013		
AN	AP	AE	AN	AP	AE
7	45	5	8	86	6
TOTAL: 57 *			TOTAL: 100**		

Fuente: CNE (2014). Altas Electoral 2009 – 2014. Elaboración propia.

* 57 de 124 asambleístas

** 100 de 137 asambleístas

AN: Asambleístas Nacionales. AP: Asambleísta Provinciales. AE: Asambleístas por el Exterior.

Como se puede apreciar, pese al incremento en el número total de asambleístas, Alianza País pasó de controlar el 45,96% del Legislativo en el año 2009, al 72,99% en el 2013. Su mayor presencia en el Parlamento se encuentra en los escaños que obtuvo por concepto de las elecciones para asambleístas provinciales.

Desde esta perspectiva, el problema subyace en el papel de los partidos y movimientos políticos de minoría; aquellos que no cuentan con un amplio aparato de propaganda a su servicio y cuyas estructuras son pequeñas, poco estables (en el caso de los partidos con crisis internas) y con presencia coyuntural en cantones o provincias. Por lo que, si la obtención de escaños ya era complicada para el proceso electoral de 2009; para las elecciones legislativas de 2013 varios de esos partidos y movimientos no obtuvieron representación política en la Asamblea.

Un ejemplo de ello es el movimiento Concertación Nacional Democrática de César Montufar, quien llegó como único representante de su organización política al Legislativo en 2009 y, aunque participó en la competencia electoral de 2013, no mantuvo su curul. Lo cual, podría marcar una distinción entre competidores electorales exitosos y no tan exitosos en

función no solo de la ventaja del movimiento de gobierno, sino también en cuanto a la adaptabilidad de los demás competidores a las reglas del juego imperante; en donde la organización política más fuerte es la que sobrevive.

3.2. *Una competencia desigual con el uso de la propaganda política*

El veto presidencial de febrero de 2012 contempló la reforma al Art. 203 del Código de la Democracia, el mismo que regula la realización (con fondos públicos) y contratación (privada) de propaganda política y publicidad durante las campañas electorales. La versión original de este artículo del año 2009 sostenía lo siguiente:

Durante el período de campaña electoral, conforme la norma constitucional y legal, está prohibido que las instituciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, realicen propaganda, publicidad y utilicen sus bienes y recursos para estos fines. También se prohíbe la contratación privada de propaganda y publicidad sobre el proceso electoral en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias” (Código de la Democracia, 2009: 29).

En cierta medida, el objetivo de la norma era evitar las inequidades que surgían al momento en que los candidatos invertían ingentes sumas de dinero para acceder a las franjas publicitarias de los medios televisivos y radiales, así como a las páginas de los principales diarios de circulación local y nacional. Esto hizo de la competencia electoral un escenario que, a más de visibilizar la lucha ideológica y política por el poder; también evidenció la disputa entre las chequeras de los partidos y sus líderes.

El balotaje electoral de 2006 es una muestra de ello, ya que el entonces candidato a la Presidencia de la República por el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional – PRIAN, Álvaro Noboa, lideró el gasto electoral en publicidad pese a la inmovilización de su cuenta; con una inversión registrada (hasta noviembre de 2006) de 1'129.100,50 dólares. Mientras que el candidato de Alianza País, Rafael Correa, destinó 745.989,80 dólares (Ecuadorinmediato.com, 2006). Esto nos demuestra que la ventaja

-antes de 2009- estuvo en manos de quienes contaban con los recursos económicos privados para sus campañas.

El Art. 202 del Código de la Democracia en sus incisos segundo y tercero, hace referencia precisamente al tema de la equidad que debe existir para la promoción electoral de los candidatos, a través de los medios de comunicación: prensa, radio, televisión y vallas publicitarias.

Art. 202 [...] el Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. El financiamiento comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. El Consejo Nacional Electoral reglamentará el financiamiento según la realidad de cada localidad (Código de la Democracia, 2009).

De igual manera, la Constitución de la República del año 2008 en su Art. 115 entra en sinergia con los Artículos 202 y 203 del Código de la Democracia, pues sostiene:

Art. 115. El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral. La ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará el límite y los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral (Constitución del Ecuador, 2008).

Lo expuesto, nos demuestra que tanto la Constitución de la República, como el Código de la Democracia convergen en la intención de regular y -hasta cierto punto- eliminar una competencia electoral desigual en términos económicos.

Por otra parte, la reforma al Art. 203 del Código de la Democracia del año 2012, hizo que las reglas del juego electoral se modifiquen en dos ámbitos que inciden en la competencia: la eliminación de la restricción para que las instituciones del Estado pauten propaganda y publicidad en tiempos de campaña electoral; y el ejercicio periodístico en el marco de los procesos electorales.

En lo que respecta al primer punto, el Art. 21 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, Código de la Democracia, detalla cuatro excepciones para que las instituciones del Estado hagan uso de fondos públicos -durante las campañas electorales- para su propaganda y publicidad:

1. Que la difusión se refiera a información de programas o proyectos que estén ejecutándose o que por la oportunidad deban ejecutarse en dicho período.
2. Cuando se requiera de las obras públicas, informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas; o lugares alternos;
3. En situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiera informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad, evacuación, cierre o habilitación de vías alternas.
4. Cuando se requiera informar temas de importancia nacional tales como: campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de periodos de clases, seguridad ciudadana, u otras de naturaleza similar (Código de la Democracia, 2012: 5).

La difusión de las obras públicas realizadas por el gobierno de la época, así como de los proyectos en ejecución, constituyeron -en sí mismas- una forma (sutil) de promoción al régimen, al candidato/presidente y a su organización política.

Según los informes de enero y febrero de 2013, realizados por la Corporación Participación Ciudadana, las instituciones del Estado invirtieron USD 799.116,30 en publicidad, durante esos dos meses de campaña electoral¹⁴. Mientras que Alianza País, destinó USD 1.021.505,81 como parte del Fondo

14. La Secretaría de Comunicación – SECOM, fue el ente que más pautas realizó durante el mes de febrero de 2013, “con 480 minutos al aire, 600 spots y con un monto de USD 431.274,02” (Corporación Participación Ciudadana, 2013: 6).

de Promoción Electoral que recibió del CNE, para el uso de franjas publicitarias en la campaña del candidato/presidente, Rafael Correa, en medios televisivos y radiales (Corporación Participación Ciudadana 2013, 1).

Esta ventaja avalada por la ley en función del uso de fondos públicos para la difusión de propaganda y publicidad estatal no pudo ser contrarrestado, ni siquiera, por los entonces pre-candidatos a las elecciones presidenciales de 2013: Guillermo Lasso y Mauricio Rodas; quienes, entre los años 2011 y 2012 invirtieron en espacios publicitarios importantes sumas de dinero. Así lo destaca la Corporación Participación Ciudadana en su informe del 13 de julio de 2012 titulado: “Actores o sujetos políticos en pre-campaña durante el 2011 y 2012”.

Cuadro 4.

Inversión publicitaria de precandidatos en los medios de comunicación 2011-2012

PRECANDIDATO/PARTIDO	MONTO	MINUTOS	SPOTS
Banco del Barrio – Guillermo Lasso	1.802.093,92	707	1 004
CREO – Lista 21	65.343,80	37	222
Mauricio Rodas – Propuestas para un Ecuador mejor	42.316,76	11	19
MPD 34 años	17.040,00	36	71
TOTAL	1.926.794,48	791	1 316

Fuente: Corporación Participación Ciudadana. (2012). Actores o sujetos políticos en pre – campaña durante el 2011 y 2012.

Elaboración propia.

En cuanto a las limitaciones del ejercicio periodístico, la reforma al Art. 203 del Código de la Democracia, condiciona el trabajo de los medios y los periodistas, bajo el argumento del supuesto “favoritismo” (directo o indirecto) hacia determinados candidatos, a través de entrevistas, reportajes y demás géneros periodísticos¹⁵.

15. Al respecto, el Art. 203 del Código de la Democracia sostiene: “Los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política” (Código de la Democracia, 2012: 5).

Lo cual nos remite a un tema que, pese a no formar parte de este trabajo, sí puede dar lugar a nuevos diálogos y debates sobre la libertad de prensa, expresión y opinión. Por ello, cabe preguntarse: ¿En qué momento la información que un medio brinda a los ciudadanos sobre las propuestas de un candidato se convierte en promoción o “favoritismo”? ¿A discrecionalidad de quién está el decidir esto? ¿A qué intereses políticos respondían los encargados de operativizar el cumplimiento de esta normativa? ¿Qué tan fiable es la premisa que sostienen los medios de comunicación y algunos periodistas en torno a su condición de objetividad?

3.3. La demarcación de las circunscripciones electorales

Las elecciones de 2013 tuvieron un componente adicional que otorgó ventaja al movimiento Alianza País: el cambio en la cartografía electoral de las provincias con mayor población y su combinación con el método de asignación de escaños (D’Hondt).

El Art. 150 de la Ley Orgánica Electoral – Código de la Democracia, detalla en su numeral 2 el mecanismo para la conformación de la Asamblea Nacional:

Dos asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo con el último censo nacional de población. En las circunscripciones electorales que elijan entre ocho y doce representantes se subdividirán a su vez en dos circunscripciones, aquellas que pasen de trece y hasta diez y ocho se subdividirán en tres y las que pasen de diez y ocho lo harán en cuatro circunscripciones; cuando concurren las circunstancias que motiven la subdivisión de circunscripciones electorales, el Consejo Nacional Electoral decidirá su delimitación geográfica garantizando que la diferencia entre asambleístas a elegir en cada nueva circunscripción no sea superior a uno, la delimitación y número de asambleístas de las nuevas circunscripciones deberá constar en la decisión por la que se convoquen las elecciones. En el caso en que una provincia cuente con un distrito metropolitano, el número de asambleístas a elegir por tal

circunscripción provincial se determinará sin contar con la población del distrito metropolitano.

Las provincias que fueron distritadas para las elecciones generales del año 2013 fueron: Pichincha, Guayas y Manabí. Las dos primeras con cuatro circunscripciones cada una; mientras que la última tiene dos. Esto significó que, los candidatos de las distintas tiendas políticas que competían en cada una de estas zonas, respondían únicamente al electorado de ellas; y no al de toda la provincia.

Al respecto, un posible argumento que sustenta el establecimiento de circunscripciones en las provincias con mayor población es el de conseguir un acercamiento más eficaz entre los candidatos, sus partidos y movimientos políticos, y los ciudadanos. ¿Bajo qué lógica se podría lograr esto? A través de la división o la fragmentación electoral de las provincias para elegir candidatos en cada localidad o circunscripción. Además, “los candidatos, de ser electos, tendrán que rendir cuentas al distrito o sección territorial que los eligió, aunque éstos sean parte de la provincia” (Corporación Participación Ciudadana, 2012: 19). Otro punto de importancia tiene que ver con la desconcentración de la actividad electoral de las capitales de provincia.

Sin embargo, no todas las organizaciones políticas se vieron beneficiadas con la distritación de las provincias. Para ser más exactos, solo Alianza País obtuvo réditos políticos con la aplicación de estas nuevas reglas del juego electoral, entre otras razones por el uso de un método electoral (D’Hondt) que, como vimos, otorga un mayor número de escaños a los partidos y movimientos más votados en perjuicio de las agrupaciones de minoría (Basabe, 2014) (Montufar, 2013).

Si comparamos el porcentaje de votos recibidos en las elecciones para legisladores provinciales del año 2013 por el movimiento de gobierno – Alianza País *versus* los escaños asignados a éste; se puede evidenciar la existencia de una sobre-representación parlamentaria.

Cuadro 5.

Alianza País: relación entre la votación obtenida y la representación adjudicada. Elecciones 2013

PROVINCIA	CIRCUNSCRIPCIÓN	VOTOS	%	REPRESENTACIÓN DE ALIANZA PAÍS POR PROVINCIA %
GUAYAS	1	1.165.222	53.59	80
	2	934.544	53.88	60
	3	1.039.182	49.35	60
	4	1.093.904	62.31	100
MANABÍ	1	384.201	48.33	75
	2	895.185	55.60	100
PICHINCHA	1	830.026	47.34	75
	2	1.237.342	57.93	80
	3	646.922	57.02	75
	4	241.490	51.47	100

Fuente: Consejo Nacional Electoral. Montufar (2013: 25-26).

Elaboración propia

En la circunscripción 1 de Pichincha, integrada por 16 parroquias urbanas del centro-norte de Quito, Alianza País obtuvo el 47,34% de los votos válidos; pese a ello, consiguió 3 curules de las 4 que estaban en disputa. En la misma provincia, en la circunscripción 4, compuesta por 7 cantones, el movimiento de gobierno alcanzó el 51,47% de los votos; no obstante, se llevó las 3 curules en juego.

Otro caso similar se dio en la circunscripción 4 de la provincia del Guayas, integrado por 20 cantones, donde Alianza País consiguió una votación superior al 50% de los votos válidos y se le adjudican 5 curules. Es decir, la totalidad de los puestos en disputa.

Como se puede evidenciar, la aplicación del método D'Hondt sumado a la distritación de las provincias con mayor población, puso al movimiento Alianza País con posición de ventaja frente a los demás competidores electorales; situación que se evidenció en su amplia presencia legislativa, con la cual los acuerdos políticos para la aprobación de leyes quedaron en segundo plano.

El clientelismo político-electoral vs el intento modernizador de la política

Uno de los principales objetivos al momento de elaborar la Constitución de 1979 y la Ley de Partidos fue evitar la proliferación de organizaciones políticas en la competencia electoral y reducir en la medida de lo posible las prácticas clientelares utilizadas por los primeros líderes populistas del siglo XX, para la modernización de la política partidaria y electoral en el país. Sin embargo, dicha Constitución y las posteriores Cartas Magnas (1998 y 2008), así como las distintas reformas eleccionarias no cumplieron con este cometido: entre otras razones por la constante presencia de prácticas clientelares para la captación de votos. La pregunta es: ¿Por qué, pese al ingreso de nuevos líderes y partidos en el escenario político-electoral, las prácticas clientelares de antaño perduraron en el tiempo?

Una primera respuesta a esta pregunta la ofrece Francisco Sánchez (2008: 39), al mencionar que los partidos políticos que surgieron luego del retorno a la democracia eran demasiado jóvenes para mantener vínculos estrechos con los electores, por consiguiente, usaron las viejas estrategias clientelares para la captación de votos. Otra respuesta, la de Santiago Basabe (com. pers.), es corta y a la vez contundente, pues afirma que pese al cambio de los actores políticos las lógicas clientelares son las mismas hasta la presente.

Si analizamos lo que implica el concepto de cambio expuesto por Basabe, veremos que este no solo tiene que ver con la variación de un actor por otro en el escenario político-electoral; sino también con el traslado de los operadores clientelares desde sus antiguos partidos hacia nuevas organizaciones políticas para reproducir las viejas prácticas de captación de votos. Esto produjo la continuidad del clientelismo y, por ende, de la informalidad luego del retorno a la democracia, como el mecanismo más frecuente que usaron los partidos para relacionarse con la ciudadanía.

Lo dicho nos lleva a considerar que la formalidad no fue, ni ha sido, un baluarte o característica insigne de los partidos y sus líderes políticos. Por el contrario, son las estrategias de relacionamiento informal (clientelar) las que han perdurado en el tiempo.

Desde esta perspectiva, se podría comprender el porqué de la continuidad de las prácticas clientelares -por ejemplo- en los partidos que reemplazaron al CFP en la ciudad de Guayaquil: el Partido Social Cristiano – PSC y el Partido Roldosista Ecuatoriano – PRE; pero también en las organizaciones políticas que surgieron con el declive de los partidos tradicionales: el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional – PRIAN y el movimiento Alianza País – AP.

Esta reproducción en el tiempo de las prácticas clientelares de los partidos políticos evidenciaría la presencia del pasado en el presente y –por ende- la existencia de lo que Bourdieu (2007: 88) denominaría *hábitus*:

Producto de la historia, el *hábitus* origina prácticas, individuales y colectivas, y por ende historia, de acuerdo con los esquemas engendrados por la historia; es el *hábitus* el que asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de pensamientos y de acción, tienden, con más seguridad que todas las reglas formales y todas las normas explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo.

Dicho de otra manera, este pasado que sobrevive en el presente y se actualiza en él a través del *hábitus*, hace que el clientelismo -entendido como la “distribución de recursos por parte de funcionarios o candidatos políticos a cambio de apoyo político, fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, en la forma de votos” (Gay, 1990: 648)- opere como una regularidad o tradición con la cual los votantes se encuentran no únicamente durante los procesos electorales, aunque sí se manifiesta más abiertamente en ellos (Mantilla, 2013: 56).

Ahora bien, si las reproducciones de las prácticas clientelares son producto del *hábitus* político que contempla el intercambio de bienes, beneficios, dones o favores materiales y simbólicos entre una élite política y los subalternos. ¿En qué medida los constantes cambios a las reglas del juego electoral incidieron en la continuidad de las prácticas clientelares? El aumento en el número de competidores (partidos, movimientos y ciudadanos

independientes) provocado por las distintas reformas a la normativa electoral entre 1996 y 2006, dieron lugar a un mayor número de candidatos y, por ende, de ofertas de campaña destinadas a saciar la demanda de beneficios de los votantes.

Esto generó una suerte de competencia no solo para captar más votos, sino también para conseguir el apoyo y la lealtad de nuevas clientelas políticas. Es por ello que, a partir del año 2002, cuando inició el declive de los partidos tradicionales, las nuevas organizaciones políticas como el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional – PRIAN y el Movimiento Alianza País – AP; buscaron retomar los lazos clientelares que dejaron los partidos políticos en crisis.

En el caso del PRIAN, su líder Álvaro Noboa movilizó en las campañas presidenciales de los años 2002, 2006, 2009 y 2013 las brigadas médicas de su esposa, Anabella Azín, hacia los suburbios de Guayaquil y las zonas marginales del país para ofrecer a sus habitantes la atención médica que no recibían de parte del Ministerio de Salud o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, entre otras razones por las largas horas de espera previa a la consulta, por no estar afiliados, o simplemente por la falta de médicos y medicamentos.

Es así como el PRIAN intentó hacer de los suburbios su principal bastión electoral y clientelar. Un sector que vale recordar fue tradicionalmente manejado por el CFP hasta antes de los ochenta y que luego pasó a manos del PRE y del PSC.

Mientras que Alianza País cimentó su estructura caudillista y electoral en función de las críticas del líder carismático, Rafael Correa, al modelo económico neoliberal, al pago de la deuda externa y al ambiente de inestabilidad causado por los partidos políticos tradicionales a quienes catalogó de partidocracia. En este caso, la oferta clientelar no vino de la mano de dádivas o la entrega de bienes materiales; sino que estuvo acompañada por la necesidad de recuperar la institucionalidad del Estado, a través de una nueva Constitución; aunque para ello tuviera que cesar en funciones al Congreso Nacional.

Lo que vendrá después serán las concentraciones auspiciadas por Alianza País tanto en la Plaza de la Independencia como en la Avenida de los Shyris, las cuales movilizaron –a cambio de dinero y comida– a cientos de ciudadanos de parroquias urbanas y rurales de la capital y de provincias, a fin de construir ante la opinión pública la imagen de un apoyo multitudinario de los sectores populares del país hacia la denominada “Revolución Ciudadana”. Esto, sin dejar de lado las ingentes sumas de dinero destinadas a la inversión social, no únicamente con el objetivo de crear un ambiente de mayor equidad; sino para el aparato clientelar de su organización política en las zonas y grupos sociales beneficiarios de los recursos, tal como se mencionó en el apartado anterior.

Las pugnas internas por el liderazgo de estructuras clientelares

Para referirnos a este punto, es oportuno establecer distinciones entre los líderes fundadores de las organizaciones políticas que se convirtieron en caudillos y referentes al interior de ellas y; los líderes emergentes, aquellos que provenían de las mismas tiendas políticas y que buscaban espacios de poder en sus estructuras para visibilizarse como actores con proyección local y nacional. Las diferencias de ambos coadyuvaban a las crisis partidarias.

Sin embargo, las disputas no se dieron únicamente a esta escala, sino también entre dirigentes con igual trayectoria. En este escenario, la confrontación giró en torno a la legitimación de los líderes políticos como caudillos de las estructuras clientelares con las que participaban en elecciones. Desde esta perspectiva, los partidos y movimientos no eran vistos como espacios colectivos de diálogo y debate en torno a programas y proyectos políticos; o lugares destinados para la reflexión y formación de cuadros con miras a la competencia electoral. Sino todo lo contrario, eran entidades donde el líder (caudillo) asumía (implícitamente) la categoría de propietario, amparado en la aceptación popular y los votos obtenidos.

Por estas razones, las pugnas entre dirigentes pasaron del ámbito ideológico y político al plano personal. Así lo afirma Rodrigo Borja, expresidente de la República, en comunicación personal del 3 de noviembre

de 2017, quien sostiene que “las pugnas y las rivalidades personales en las dirigencias partidistas, perjudicaron a algunos partidos”.

Este criterio se complementa con el de Andrés León, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, quien manifiesta: “Mucho me temo que ahora el trasfondo de las pugnas internas tenga que ver más bien con la disputa de espacios de intereses, poder y los intentos de apoderarse de tal o cual organización política. El tema ideológico ha quedado en tercer plano” (Expreso.ec, 2018).

Son precisamente estas divergencias entre líderes las que pusieron en evidencia los problemas de democracia interna en los partidos y movimientos políticos. Para ello, entenderemos como democracia interna al “[...] procedimiento a partir del cual los militantes participan en la formación de las decisiones del partido y, para hacerlo, utilizan mecanismos competitivos (electivos)” (Freidenberg, 2009: 287).

La ausencia de este principio puede traducirse en la siguiente sintomatología: i) falta de equidad y disputas para integrar las listas electorales. ii) posible influencia de las relaciones de compadrazgo al momento de nombrar a las directivas de cada tienda política o en la conformación de las listas. iii) surgimiento de nuevas organizaciones políticas.

Ahora bien, hay excepciones como las del partido Izquierda Democrática – ID, donde se realizó un proceso de elecciones primarias en la década de los ochenta entre Raúl Baca Carbo y Rodrigo Borja Cevallos, para definir la candidatura a la Presidencia de la República. En el año 2014, Alianza País también realizó un proceso similar enfocado a la elección de sus directivas nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. Aunque, seis años antes, el buró político de este movimiento fue el encargado de decidir qué candidatos participarían en las elecciones generales de 2009.

¿Por qué los líderes y dirigentes debilitaron a sus propios partidos?

Al respecto existen explicaciones básicamente descriptivas que no ofrecen

evidencia suficiente como para adjudicar una razón plausible entre las hipótesis que se pueden considerar sobre este tema. Sin embargo, en términos generales y en función de las entrevistas realizadas a políticos y académicos en este trabajo, se puede observar un patrón común para que los líderes y dirigentes -desde sus distintos espacios de poder- optaran por reformas tendientes a relajar la estabilidad de los partidos.

Lo cual explicaría por qué los legisladores (que de hecho provenían de partidos políticos clientelares) aprobaran reglas electorales que tendían a dispersar y desaparecer a los partidos. Este patrón respondería a los siguientes criterios:

- a. Las reformas ejecutadas a partir de 1996 (votación en listas abiertas y entre listas, participación de los independientes, irrespeto al umbral electoral, la no constitución de partidos nacionales) apostaron a la constitución de liderazgos personalistas antes que al fortalecimiento institucional de los partidos.
- b. Las reformas provenientes del Ejecutivo buscaron legitimar a los gobiernos y sus partidos con la ciudadanía, para que los problemas políticos, económicos y sociales no sean el centro de atención de la opinión pública.
- c. Este tipo de liderazgos personalistas afianzaron una tradición clientelar en el Ecuador que se mantiene vigente hasta la fecha.
- d. El afán de los líderes y dirigentes políticos por constituirse en caudillos al interior de sus partidos desechó cualquier viso de democracia interna.
- e. Las debilidades de sus propias dirigencias y el paso de pugnas político-ideológicas a disputas personales, dieron lugar a la fragmentación de los partidos y movimientos y, por ende, a la creación de nuevas organizaciones políticas, muchas de ellas coyunturales.
- f. Lo expuesto visibiliza a los partidos y movimientos como propiedad privada de caudillos.

- g. La proliferación de partidos y movimientos que se dio a partir del año 2002 en adelante, generó una competencia multifraccionada con líderes locales y nacionales que intentan legitimarse como caudillos.

Todos estos criterios nos dejan entrever que los únicos ganadores con la pérdida de la institucionalidad de los partidos y movimientos eran sus propios integrantes (caudillos locales y nacionales), que contaban con poder de decisión en el Parlamento; pues perennizaban a sus organizaciones como estructuras clientelares de las cuales obtenían beneficios políticos dentro del reparto de puestos directivos o en la misma conformación de las listas.

Conclusiones

La nueva normativa electoral del periodo 2009- 2013, coadyuvó a crear un ambiente de estabilidad tanto para el movimiento oficialista como para el gobierno de turno. Aunque, en términos generales, las constantes reformas evidencian que la costumbre es el cambio y la inestabilidad institucional en torno a lo normativo. Por ello, la pregunta central de este trabajo es: ¿Qué características de la competencia electoral entre 2009 y 2013, cuando se estructuró una nueva institucionalidad eleccionaria, contribuyeron a la estabilidad política del movimiento oficialista y del gobierno de turno?

Para contestar esta inquietud, describimos y analizamos que la nueva normativa de 2009-2013 afianzó el predominio de una sola organización en el escenario político y electoral. La estabilidad de este momento responde al agotamiento del modelo electoral anterior, pero también al hartazgo de los ciudadanos frente al manejo de la economía y la política, direccionada por los partidos tradicionales (ID, PSC, DP y PRE), que en su conjunto fueron identificados bajo el apelativo de “partidocracia” (incluidos el PRIAN y PSP). La serie de triunfos de Rafael Correa y de su movimiento Alianza País a partir de 2007, marcaron un cambio de etapa con relación a los gobiernos indiligados bajo esa categoría, que no llegaron a concluir sus mandatos desde 1996.

Sin embargo, la tendencia a ampliar el número de competidores continuó pese a la nueva reglamentación electoral. Por ejemplo, en 2006

estuvieron registrados en el CNE 74 movimientos políticos entre nacionales, provinciales y cantonales; esta cifra se incrementó en 2009 a 371 (cinco veces más). ¿Qué explicaría esta continuidad? La diferencia normativa entre partidos y movimientos, pues los primeros se ciñen al ámbito nacional y los segundos pueden ser provinciales, cantonales y parroquiales.

Los requisitos para la inscripción de partidos y movimientos tampoco son los mismos. En el caso de los partidos, se establece que sus directivas deben estar al menos en la mitad de provincias y en dos de las tres con mayor población. Así también, el registro de sus afiliados debe estar integrado por el 1,5% de integrantes del registro electoral utilizado en el último proceso pluripersonal de carácter nacional. Mientras que sus afiliados deberán pertenecer en un 60% a las provincias con mayor población y un 40% a las provincias restantes (Código de la Democracia, 2009: 42).

Los movimientos políticos corrieron con una suerte distinta, precisamente por los diferentes ámbitos electorales en los que pueden participar. Por ejemplo, el registro de adherentes¹⁶ deberá ser equivalente al 1,5% del registro electoral utilizado en el último proceso eleccionario de la jurisdicción correspondiente. Es decir, de cada localidad. (Código de la Democracia, 2009: 42).

Si bien es cierto, la Ley Orgánica Electoral define el ámbito territorial en el que pueden participar las organizaciones políticas, no incentiva a partidos y movimientos a agruparse alrededor de tres o cuatro posicionamientos ideológicos medianamente diferenciados con estructuras nacionales y presencia regional y local; sino que, por el contrario, ahonda en su atomización promoviendo estructuras localistas de corta duración. Esto produce un efecto negativo para el afianzamiento de los partidos y movimientos con proyección nacional, porque si una de estas organizaciones no cuenta con estructura en un cantón o parroquia, lo más práctico es hacer una alianza con el caudillo local para ganar un espacio de poder. Lo cual

16. El Art. 334 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas – Código de la Democracia sostiene lo siguiente: “Los movimientos tendrán adherentes a quienes permanentes constituirán la estructura organizativa y pueden elegir y ser elegidos para las dignidades internas deberán presentar una declaración de no pertenecer a otro movimiento o partido político, además de cumplir con los requisitos que establezca su régimen orgánico”.

evidencia la falta de incentivos a los partidos y movimientos nacionales para que estos formen espacios propios en lo regional, local y cantonal.

Algunos elementos que definieron al periodo 2009-2013 fueron: i) La victoria electoral de Alianza País en 2007 y su ratificación como gobierno en 2009 y 2013 (en primera vuelta). ii) La culminación de todos los mandatos presidenciales de Rafael Correa y su movimiento. iii) El constituirse como partido predominante o de mayoría al interior de la Asamblea Nacional con 57 de 124 legisladores en 2009 y 100 de 137 en 2013. Esto demostró una tendencia diferente marcada por un Ejecutivo y Legislativo fuertes y articulados, aspecto que delineó un cambio en el escenario de fragmentación y confrontación política entre estas funciones del Estado. iv) El paso de un organismo electoral multipartidista (con representantes de los partidos más votados) a uno controlado por una sola tienda política (Alianza País); pese a que el mecanismo para la designación de sus integrantes fue mediante concurso de méritos y oposición a partir de 2011, y no por delegación directa del Jefe de Estado o acuerdos al interior de la Asamblea.

Cuadro 6.

Cercanía entre los presidentes del CNE y el gobierno de Alianza País

Omar Simon	Domingo Paredes	Juan Pablo Pozo
<ul style="list-style-type: none"> Entre 2001 y 2008 trabajó en la Corporación Participación Ciudadana. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretario Ejecutivo del extinto Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas entre 2007 y 2010. 	<ul style="list-style-type: none"> Fue secretario abogado de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en 2008, cuando estuvo presidida por la socialista Silvia Salgado, aliada al movimiento Alianza País.
<ul style="list-style-type: none"> Entre 2009 y 2011 fue presidente del Consejo Nacional Electoral – CNE de transición. 	<ul style="list-style-type: none"> En 2011 fue titular de la Secretaría Nacional del Agua. 	<ul style="list-style-type: none"> En 2011 fue posesionado como vocal del Consejo Nacional Electoral.

<ul style="list-style-type: none"> • En 2014 fue nombrado por el expresidente Correa como Secretario General de la Presidencia de la República. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fue presidente del Consejo Nacional Electoral entre 2011 y 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entre 2015 y 2017 asumió la presidencia de ese organismo.
	<ul style="list-style-type: none"> • Durante su gestión se dispuso la descalificación de la Consulta Popular solicitada por el colectivo Yasunidos. Se extinguieron los partidos PRIAN, PRE, MPD y Ruptura de los 25. 	<ul style="list-style-type: none"> • Durante su gestión hubo el caso de los muertos empadronados.
	<ul style="list-style-type: none"> • En 2014 retorna a la Secretaría Nacional del Agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • En 2017 fue condecorado por el expresidente Rafael Correa luego de las elecciones de ese año que dieron como ganador a Lenín Moreno.
	<ul style="list-style-type: none"> • En 2016 se afilia al movimiento Alianza País. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ese mismo año varios sectores de oposición hablaron de un fraude electoral por el “apagón informático” que sufrió el CNE.

Fuente: Prensa escrita

Elaboración propia.

Como nos muestra el cuadro 6, el vínculo entre los expresidentes del Consejo Nacional Electoral – CNE y Alianza País fue estrecho y evidencia que la estabilidad para gobernar no solo radica en la mayoría parlamentaria; sino también en la influencia del movimiento de gobierno y del poder Ejecutivo en el organismo de control electoral, donde se operativizan las reglas de la competencia partidista organizada.

Por todo lo expuesto, tenemos una secuencia histórica que nos permite responder la pregunta central planteada en este trabajo, respecto a las características de la competencia electoral de 2009-2013.

Una de las variables institucionales que perdura desde 1997, tiene que ver con el voto abierto y entre listas; el mismo que legitima y privilegia la presencia en elecciones de caudillos locales y nacionales muchas veces amparados en estructuras políticas ficcionales –creadas solo para competir en

elecciones y luego desaparecer- antes que en partidos y movimientos fuertes e institucionalizados.

Este tipo de votación promueve los personalismos; pero sobre todo la posibilidad de que el electorado no vote por una agrupación política en sí misma, sino por un actor en particular. Situación que refleja que los cambios a la normativa electoral no garantizaron la modernización de la política en el Ecuador, en su lugar propiciaron la recurrencia a un hábitus clientelar en los términos expuestos por Bourdieu (2007), que para el caso ecuatoriano se remonta desde la década del cuarenta y perdura en las prácticas políticas de los líderes y sus organizaciones, muchas de ellas fragmentadas por las disputas internas entre dirigentes que pugnan por espacios de poder en sus directivas o por constituirse en los nuevos líderes partidarios.

Finalmente, con todos estos elementos expuestos, las nuevas autoridades del organismo electoral deben sentar las bases para una profunda reforma eleccionaria que, en sí misma, produzca una reingeniería seria en torno a lo normativo, para tener partidos fuertes y con ello un verdadero sistema de partidos en el país.

Referencias

- Bourdieu, Pierre. (2007). *El sentido práctico*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Consejo Nacional Electoral. (2018). *Sistema estadístico electoral*, (enero de 2017). Obtenido de <https://app03.cne.gob.ec/EstadisticaCNE/Ambito/Candidatos/Candidato.aspx>
- Corporación Participación Ciudadana. (2012). *Actores o sujetos políticos en pre-campaña durante el 2011 y 2012*. Quito: Corporación Participación Ciudadana.
- (2012). *Informe de monitoreo de medios correspondiente a diciembre de 2012 en nueve canales de televisión de señal nacional*. Quito:

Corporación Participación Ciudadana.

----- (2013). *Informe de monitoreo de medios correspondiente a diciembre de 2013 en nueve canales de televisión de señal nacional*. Quito: Corporación Participación Ciudadana.

Freidenberg, Flavia. (2009). “¿Qué es la Democracia Interna? Una propuesta de redefinición conceptual”. En *La democracia en su contexto*. Estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su septuagésimo aniversario, José Reynoso Núñez, (ed.): 277-295. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

----- (2011). *El Código de la Democracia: una evaluación del proceso de reforma electoral del Ecuador (2008-2009)*. Quito: Ágora Democrática.

Gay, Robert. (1990). “Community Organization and Clientelist Politics in Contemporary Brazil: a case study from suburban Rio de Janeiro”. En *International Journal of Urban and Regional Research* 14, (4):648-666.

Hernández, Virgilio. (2009). *Reforma Electoral: ¿Vida o muerte de las organizaciones políticas?* Quito: NDI.

IDEA Internacional. (2006). *Diseño de sistemas electorales: El nuevo manual de IDEA Internacional*, (enero de 2018). Obtenido de <http://www.idea.int/publications/esd/es.cfm>

Instituto Nacional Demócrata. (2012). *Cartilla. Aplicaciones Prácticas del Código de la Democracia*. Quito: Corporación Participación Ciudadana.

Laclau, Ernesto. (1980). *Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, Fascismo, Populismo*. México: Siglo XXI.

Legarda, Verónica. (2015). *La economía política del gasto social en Ecuador: La teoría del ciclo político aplicada al gobierno de Rafael Correa*.

Quito: FLACSO-Ecuador.

López, Adrián y Cubillos, Paula. (2009). “Análisis del referéndum constitucional 2008 en Ecuador”. En *ÍCONOS, Revista de Ciencias Sociales*, (33), FLACSO-Ecuador (ed.): 13-20. Quito: FLACSO.

Lucio, Pablo. (2012). *Revolución Ciudadana: Tanto para tan poco*. Quito: Universidad San Francisco de Quito.

Mantilla, Lucia. (2013). “Al margen del poder y de la comunidad: la “cultura Política” del clientelismo”. En *Revista Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad*, XX, (56): 39-66. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, (febrero de 2018). Obtenido de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13827198007>

Montufar, César. (2013). Ecuador: Análisis de los resultados electorales del 17 de febrero de 2013. *Serie Propuestas para el Debate*, No. 1. Quito: Movimiento Concertación.

Sánchez, Francisco. (2008) *¿Democracia no lograda o democracia malograda?* Quito: FLACSO-Ecuador.

Sartori, Giovanni. (1980). *Partidos y Sistemas de Partidos*. Madrid: Alianza Editorial.

Verdesoto, Luis. (2017). *Democracia, Derechos Humanos e Instituciones en Ecuador*. Quito: PDDHE.

Viteri, Galo. (2009). “Ecuador Migración y Remesas I Semestre 2009”. En *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, (119), (febrero de 2018). Obtenido de <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2009/gvd2.htm>.

Referencias normativas

Constitución de la República. (1979). Registro Oficial No. 800 de fecha 27 de marzo de 1979.

Constitución de la República. (1998). Registro Oficial No. 1 de fecha 11 de agosto de 1998.

Constitución de la República. (2008). Registro Oficial No. 442 de fecha 20 de octubre de 2008

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. (2009). Registro Oficial, Suplemento, 578, 27 de abril de 2009.

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. (2012). Registro Oficial, Suplemento, 634, 6 de febrero de 2012.

Referencias periodísticas

“Pdte. Ratifica. ‘Sí meteré mano en Función Judicial’”. Ecuavisa, 25 de enero de 2011, (febrero de 2018). Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=_INDBS-8JLQ.

“12 partidos se van a reinscribir en el CNE”. El Comercio, 15 de septiembre de 2009, (abril de 2018). Obtenido de <http://www.elcomercio.com/actualidad/12-partidos-reinscribir-cne.html>.

“Fórmula para asignar escaños propuesta en veto presidencial otorgará más asambleístas a PAÍS, denuncian”. LaRepública.ec, 9 de enero de 2012, (mayo de 2018). Obtenido de <https://www.larepublica.ec/blog/politica/2012/01/09/formula-para-asignar-escaños-propuesta-en-veto>

presidencial-otorgara-mas-asambleistas-a-pais-denuncian/

“La eterna crisis partidaria”. Diario Expreso. 21 de enero de 2018, (junio de 2018). Obtenido de <http://www.expreso.ec/actualidad/crisis-partidista-alianzapaisorganizaciones-ecuador-XJ1975734>